

# **Argentina: el ocaso del alfonsismo**

**González, Oscar R.; Abalo, Carlos**

---

**Oscar R. González:** Periodista argentino. Jefe de Redacción, de El Periodista de Buenos Aires.

**Carlos Abalo:** Periodista argentino. Jefe de Economía, de El Periodista de Buenos Aires.

---

«Con la democracia se come, se educa y se cura», dijo el presidente Raúl Alfonsín durante su campaña electoral de 1983. Al iniciar el 10 de diciembre de 1988 su quinto y último año de mandato, se habrá demostrado que aquellas palabras no eran ciertamente una profecía: lo evidencian el récord de desocupación y la baja del salario real, la acentuada deserción escolar y el deterioro del sistema estatal de salud, algunas de las dramáticas señales del presente argentino.

Cuando Alfonsín llegue, en 1989, al final de su gestión, será el primer gobernante constitucional argentino que habrá completado su período en los últimos 38 años. Desde diciembre de 1983, al hacerse cargo del gobierno, el Partido Radical debió afrontar dos elecciones legislativas (1985 y 1987), un plebiscito popular para respaldar la paz con Chile, trece huelgas generales, dos graves rebeliones militares, otras tantas protestas de los productores agrarios, la desgastante negociación con la banca acreedora y, como correlato, un drástico plan de ajuste económico. En el mismo período debió afrontar también con otros sectores, como la conservadora Iglesia católica argentina, sobre dos temas básicos: educación y divorcio.

Como no podía ser de otra manera, después de estos tormentosos años, el gobierno llega maltrecho al final de su gestión, pero con la trascendente virtud de haber garantizado en el país la vigencia del Estado de derecho, las instituciones de la democracia representativa y el sistema de libertades inherentes a ella.

## ***Una economía ruïnosa***

En 1988 el producto bruto interno per cápita estará levemente por debajo del de 1983, y 5 puntos más abajo del correspondiente a 1970, si se toma a este último como año base. La actividad industrial, que se había recuperado en 1986, aunque sin alcanzar el nivel de 1983, siguió descendiendo hasta el segundo semestre de 1988, pero fue nuevamente comprimida por la puesta en marcha del «Plan Primavera», nueva fase del programa antiinflacionario conocido como «Austral».

En 1984, el promedio anual de inflación fue de 627 por ciento; tasa que se elevó a 672 por ciento en 1985, cuando fue dictado el citado plan como medida heroica para contener la inflación. En los primeros meses, los resultados del «Austral» fueron impresionantes y la tasa anual descendió al 90 por ciento, pero en 1987 el promedio anual de la tasa inflacionaria volvió a ascender a 131 por ciento y el índice acumulado anual correspondiente a junio de 1988 ya es del 440 por ciento, cercano al índice de 1985.

En materia salarial, los trabajadores argentinos recibieron de inmediato el impacto de los shocks antiinflacionarios: sus remuneraciones medias ascendieron en 1984 un 5 por ciento sobre los valores del año anterior, pero a partir de ese momento experimentaron un casi continuado descenso, que ubicó ese salario en un índice 30 por ciento inferior al de aquella base y, tres años después de iniciado el Plan Austral, a fines de junio de 1988, los ingresos de los asalariados habían perdido 33 por ciento de su poder adquisitivo, mientras el desempleo alcanzaba su nivel más alto de los últimos tres lustros. En mayo de 1988 la desocupación existente fue de 6,5 por ciento sobre la población económicamente activa, que se sumó a una subocupación de 7,8 por ciento.

De la misma manera que en todas las economías latinoamericanas, el problema que aparece como más grave es el de la deuda externa. Cuando Alfonsín llegó al gobierno, en diciembre de 1983, esa deuda alcanzaba a unos 46.000 millones de dólares. Los radicales se comprometieron a cuestionar su legitimidad, en los casos en que su origen fuera dudoso, y a bregar internacionalmente por un tratamiento distinto por parte de la banca acreedora, cuando se tratara de deuda legítima. La exigencia que se hacía a la banca consistía en que los pagos debían dejar un margen suficiente para crecer, porque sin crecimiento se estimaba que tampoco se podría pagar.

En aquella época, dos años después de la crisis de pagos de México, Argentina estaba sola en el frente del cuestionamiento de la deuda. México había llegado a un acuerdo con los bancos y confiaba en que podría pagar; Brasil todavía se ufana de la capacidad de su economía para crecer y pagar. La actitud de América Latina fue determinante para que Argentina terminara aceptando un acuerdo con la banca y con el Fondo Monetario Internacional. En el plano interno, la suerte de Alfonsín con la deuda externa no fue mejor. Los sindicatos confrontaban con el gobierno y superpusieron sus exigencias a la gravedad del problema de la deuda. Nadie en el país tenía todavía una idea clara de la magnitud del problema.

***Deuda externa e inflación***

El tema de la deuda externa decidió la política económica interna. Durante 1984 el ministro de Economía fue Bernardo Grinspun. Su política consistió en tratar de atacar la inflación, dando impulso a la vez al crecimiento económico, e impedir por todos los medios que el alza de los precios limara la capacidad adquisitiva de los salarios. Cuando tuvo que aceptar la política de estabilización del Fondo Monetario Internacional, ajustó los salarios a cada embate inflacionario.

En esa batalla quedó en claro que las corporaciones empresarias se amparaban en la inflación y en la política antiinflacionaria que imponía el Fondo para bajar los salarios reales y obtener un mayor margen de ganancias. El primer acto de esa batalla es el embate sobre los precios. La remarcación continuada disminuye el poder adquisitivo de los salarios y eleva las ganancias, pero su efecto es transitorio, porque los asalariados tratan de recuperar lo perdido y la batalla genera violentas diferencias en el campo empresario. Al mismo tiempo, la inflación acumulativa llega a un punto que interrumpe toda posibilidad de acumulación. La presión inflacionaria continuada, en un momento en que los empresarios tuvieron el apoyo oficial de la Central Sindical, CGT, llevó al gobierno a modificar su política y a adoptar los planes de estabilización del FMI, cuyas mayores víctimas son los asalariados.

Ese fue el turno de Juan Vital Sourrouille, designado ministro de Economía en febrero de 1985. A mediados de junio del mismo año se hizo célebre con el Plan Austral, que logró de inmediato sujetar los precios durante un período de casi nueve meses. Al cabo de ese tiempo, volvió el impulso inflacionario, que fue enfrentado con nuevos ajustes. Hasta el último de estos shocks, el Plan Primavera, de agosto de 1988, la experiencia indica que, a pesar de la política de estabilización y del sacrificio de los salarios, la inflación continúa y periódicamente se agrava, obligando a adoptar un tratamiento de shock, que vuelve a estabilizar los precios, pero cada vez por un período más corto y con objetivos más moderados. Así, en junio de 1985 se pensaba que la inflación podría desaparecer; ahora se desea que la inflación mensual sea inferior al 10 por ciento.

Las metas de crecimiento tampoco se pudieron alcanzar. La producción se reanimó en el último trimestre de 1985 y durante el primer semestre de 1986, pero luego volvió a caer y en 1987 no pudo vencer su inercia. En 1988 hay esperanzas de que el producto bruto tenga un módico crecimiento, debido a que la sequía estadounidense elevó el precio internacional de los granos y movilizó a la producción agropecuaria. Empero, los grandes terratenientes reunidos en la poderosa Sociedad Ru-

ral Argentina (SRA), con el apoyo de todos los productores, se opusieron al propósito gubernamental de utilizar parte de la renta agraria para hacer frente a la deuda externa e interna y para financiar el presupuesto.

La imposibilidad de crecimiento de la economía argentina, que ya es un caso universal típico, se explica en primer lugar por el estrangulamiento externo de divisas provocado por los pagos de la deuda, y por eso existe el convencimiento de que la deuda es el principal problema del país. Sin recursos financieros, la economía no dispone de créditos suficientes y, además, la baja de salarios comprime el mercado interno. En esas condiciones existe una irresistible tendencia de los empresarios a abandonar sus inversiones en moneda nacional para pasarse a dólares, con la consiguiente depreciación de la primera. Lo mismo sucede en casi toda América Latina, pero Argentina es, en este aspecto, un caso extremo. En el período de aplicación del Plan Austral, la inflación creció 2.000 por ciento y la moneda nacional, el «austral», creado junto con el Plan Austral, se depreció dieciocho veces frente al dólar norteamericano.

Argentina debe pagar de 4.500 a 5.000 millones de dólares por año en concepto de intereses de la deuda externa. Su economía no tiene capacidad para hacerlo y en los cuatro años y medio de gobierno radical sólo pagó aproximadamente la mitad, unos 12.000 millones de dólares, pero tuvo que endeudarse por otro tanto, y así el monto total de la deuda externa alcanza en estos momentos a 55.000 millones de dólares, y superará holgadamente los 60.000 millones cuando finalice el actual período presidencial.

La erogación de la deuda externa ocasiona un déficit fiscal que la política de estabilización trata de reducir, y para ello recurre a nuevo endeudamiento, no sólo externo, sino también interno. La deuda interna total suma en la actualidad más de 11.000 millones de dólares y ocasiona intereses muy elevados, lo que constituye uno de los factores determinantes del déficit presupuestario. Para pagar esos intereses, el gobierno ha recurrido a la reducción de los gastos en salud y educación, a la casi eliminación de las inversiones públicas y a la política de privatizaciones.

### ***El acuerdo que nunca llegó***

Impulsado por el amplio consenso obtenido en las elecciones de 1983, cuando obtuvo 47,9 por ciento de los sufragios, el gobierno de Alfonsín la emprendió resueltamente contra una parte del poder corporativo, bastante ligado al pasado autoritario. Así, apenas asumido el poder, intentó liquidar - o por lo menos condicionar - la

preeminencia de las cúpulas sindical y militar. A la primera, mediante un proyecto de ley que favorecía la democratización desde la base de las organizaciones obreras y, a la segunda, enviando a la justicia a los integrantes de las tres primeras juntas militares que dirigieron el país de 1976 a 1982.

Sin embargo, la política de confrontación con dichos intereses corporativos estuvo plagada de inconvenientes y el primero de los escollos apareció en el Parlamento, que se negó a limitar el poder de la dirigencia sindical liderada por el peronismo. A partir de entonces, las relaciones entre gobierno y sindicalismo recorrieron un tormentoso camino de aproximaciones y rechazos. El alfonsinismo cree que es necesario lograr un pacto social que no cuestione los aspectos fundamentales de su política económica, pero que haga gobernable al país durante este período de transición democrática. Pero ese propósito choca con la creciente ofensiva sindical, apoyada en las dificultades económicas y sociales. Ya en septiembre de 1984 el país había sido paralizado por la primera gran huelga general antigobiernista.

La confrontación por los ingresos tuvo al principio un objetivo común: la disputa de obreros y empresarios contra la política del gobierno, a tal punto que éstos llegaron a protagonizar un curioso proceso de coincidencias hasta entonces impensables en Argentina. Aparecieron documentos conjuntos obreroempresariales. Los dirigentes sindicales empezaron a frecuentar la Sociedad Rural Argentina (la máxima organización de los terratenientes) y bien pronto la jerarquía de la Iglesia católica se convirtió en privilegiada interlocutora de la central obrera.

El hostigamiento corporativo inquieta a Alfonsín hasta el punto de hacerle temer por una virtual «libanización» del país y es entonces que comienza a vacilar ante todos y cada uno de los factores de poder. Un sindicalista del peronismo fue designado ministro de Trabajo, alrededor de 400 militares procesados por violar los derechos humanos son de hecho amnistiados merced a las leyes de «punto final» y «obediencia debida» y la Iglesia recibe seguridades de que conservará sus privilegios en materia educacional. La banca internacional - que también actúa de hecho como una corporación - obtuvo poco a poco todas las exigencias que planteaba y la política económica terminó amoldándose a los severos planes de ajuste de los acreedores.

### ***La hora del desencanto***

Los sucesivos retrocesos del gobierno frente a los militares, después de los levantamientos de la Semana Santa de 1987 y de enero de 1988 y el peso de la crítica situa-

ción socioeconómica, terminó por alejar del radicalismo las simpatías populares. Para tener una idea del deterioro sufrido por el gobierno, basta comparar los resultados de algunos sondeos realizados por una empresa encuestadora independiente, que en agosto de 1986 otorgaba a Alfonsín el favor del 41,4 por ciento de la población consultada, con los datos de agosto de 1988, en que 76 por ciento de los encuestados consideran que la gestión gubernamental es mala (43 por ciento) o por lo menos regular (33 por ciento). En particular, el 57 por ciento considera que Alfonsín «no cumplió con lo prometido».

La ciudadanía decepcionada reaccionó mediante el llamado «voto de castigo» y de esta manera en septiembre de 1987 el peronismo logró recuperar la iniciativa y obtener un triunfo electoral en casi todos los estados provinciales, cuyos gobiernos quedaron desde entonces en poder de la oposición.

La espasmódica conducta oficial, la profunda crisis de identidad que perturba a las fuerzas armadas, la irresoluble situación económica y financiera, la impagable deuda exterior y el predominio de una salvaje puja distributiva llevaron la crisis al seno de los grandes partidos políticos. De este modo se produjo una creciente diferenciación dentro del oficialista Partido Radical y de la oposición peronista y, en ambos casos, los sectores menos avanzados lograron la hegemonía interna.

En el caso del Partido Justicialista - peronista -, Carlos Saúl Menem, candidato del sector más tradicionalista, logró imponerse sobre la tendencia modernizante encabezada por el gobernador boanerense, Antonio Cafiero, convirtiéndose en candidato presidencial para las elecciones de 1989. Por su parte, Eduardo César Angeloz, representante del ala derecha del radicalismo, fue proclamado candidato de su partido con el apoyo del propio Alfonsín, quien sepultó de este modo explícitamente las banderas progresistas de centroizquierda que lo llevaron al poder en 1983.

Dilapidado el capital político inicial del presidente Alfonsín, constreñido el gobierno a la aplicación de algunas medidas de sobrevivencia hasta el recambio que tendrá lugar en 1989, y agravados todos los datos de la realidad social y económica por el fracaso de una política de concertación y ratificado cada segmento de la sociedad argentina en la defensa de sus propios intereses, el porvenir inmediato de Argentina es bastante incierto. Y si acaso podrían darse por aventados por el momento los riesgos golpistas, no deberían en cambio subestimarse los peligros del encallamiento en una rígida opción bipartidista, que va del neoliberalismo al neo-

populismo, variantes que han acreditado por igual una serie de fracasos en su haber.

En ese sentido, la perspectiva de un triunfo peronista en mayo de 1989 significará probablemente un intento redistribucionista sin alterar las bases fundamentales del modelo económico vigente, sazonado de discurso populista. La hipotética - e improbable - victoria del candidato radical no garantizará otra cosa que la profundización del proyecto «modernizador» y privatizador vigente en el presente. Ninguno de los dos asegura un futuro alentador para este país, que otrora tuvo la esperanza al alcance de la mano.